

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 200/2024
ACTOR: PODER EJECUTIVO FEDERAL

PONENTE: MINISTRA SARA IRENE HERRERÍAS GUERRA
COTEJÓ
SECRETARIO: JULIO CÉSAR CANELA MAYORAL

Norma impugnada: El artículo 30, fracción I, inciso f), de la Ley de Cultura y Derechos Culturales del Estado de Hidalgo, adicionado mediante Decreto 903 publicado el diecisiete de mayo de dos mil veinticuatro en el Periódico Oficial de esa entidad federativa.

Problemas jurídicos que se plantean: La norma impugnada, al incorporar la *charrería* como patrimonio cultural intangible del Estado de Hidalgo ¿invade la competencia de la Federación?

ÍNDICE TEMÁTICO

	Apartado	Criterio y decisión	Págs
I.	ANTECEDENTES	Presentación de la demanda y trámite.	1-2
II.	COMPETENCIA	La Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la controversia constitucional.	3
III.	PRECISIÓN Y EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO	La adición del inciso f) al artículo 30, fracción I, de la Ley de Cultura y Derechos Culturales del Estado de Hidalgo.	3
IV.	OPORTUNIDAD	La demanda se presentó de manera oportuna.	3-4
V.	LEGITIMACIÓN	Las partes tienen legitimación activa y pasiva, respectivamente, así como se reconoce el carácter de	4-6

pZ38Zs6yenmldTpRwAqGq+HPVWHVc/AA2aVaEmYnrY=

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 200/2024

	Apartado	Criterio y decisión	Págs.
		terceros interesados a quienes acudieron con esa calidad al procedimiento.	
VI.	CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y DE SOBRESEIMIENTO	Se desestima la causa de improcedencia hecha valer por el Poder Ejecutivo local.	6
VII.	ESTUDIO DE FONDO	Es infundado el concepto de invalidez.	7-25
VII I.	DECISIÓN	<p>PRIMERO. Es procedente pero infundada la controversia constitucional.</p> <p>SEGUNDO. Se reconoce la validez del inciso f) del artículo 30, fracción I de la Ley de Cultura y Derechos Culturales del Estado de Hidalgo, adicionado mediante decreto 903 publicado el diecisiete de mayo de dos mil veinticuatro en el Periódico Oficial de esa entidad federativa.</p> <p>TERCERO. Publíquese esta resolución en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.</p>	25

pZ38Zs6yenmldTpRwAqGq+HPVWHVc/AA2aVaEmYnrY=

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 200/2024
ACTOR: PODER EJECUTIVO FEDERAL

VISTO BUENO
SRA. MINISTRA

PONENTE: MINISTRA SARA IRENE HERRERÍAS GUERRA

COTEJÓ

SECRETARIO: JULIO CÉSAR CANELA MAYORAL

Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de veintiséis de febrero de dos mil veintiséis, emite la siguiente:

S E N T E N C I A

En la que se resuelve el expediente relativo a la controversia constitucional identificada al rubro, promovida por el Poder Ejecutivo Federal en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Hidalgo.

I. ANTECEDENTES

- Promoción de la controversia.** La Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal, en representación de la presidencia de la República, promovió controversia constitucional contra los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Hidalgo por la adición del inciso f) al artículo 30, fracción I de la Ley de Cultura y Derechos Culturales de la mencionada entidad, mediante Decreto 903 publicado el diecisiete de mayo de dos mil veinticuatro.
- La parte actora hizo valer en su único **concepto de invalidez** que la porción normativa impugnada invade la competencia exclusiva de la Federación, porque declara la *charrería* como patrimonio cultural intangible del Estado de Hidalgo, a pesar de que esta actividad cultural no es única, identitaria o propia de esa entidad federativa, sino que trasciende al ámbito nacional, de manera que resulta de interés general y, por ende, su regulación corresponde al Congreso de la Unión.

pZ38Zs6yenmldTpRwAqGq+HPVWHVc/AA2aVaEmYnrY=

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 200/2024

3. **Registro de la demanda.** La presidencia de este Alto Tribunal registró el expediente y lo turnó al entonces ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena para que instruyera el procedimiento.
4. **Admisión de la demanda.** El ministro instructor admitió a trámite la controversia; ordenó emplazar a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Hidalgo, en su calidad de demandados, para que contestaran la demanda y remitieran los antecedentes legislativos del Decreto 903 y un ejemplar o copia certificada del medio de difusión oficial en que se publicó; tuvo como terceros interesados a las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión; y ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República.
5. **Manifestaciones.** La Cámara de Senadores del Congreso de la Unión manifestó esencialmente que la *charrería* es de interés nacional que amerita la intervención de la Federación, dado que no constituye rasgos identitarios o exclusivos de una determinada localidad, región o comunidad, sino que conlleva una práctica que atañe y es compartida por diversos Estados de la República, por lo que la porción normativa impugnada resultaba inconstitucional.
6. Por su parte, la Cámara de Diputados expuso que es facultad del Congreso de la Unión establecer las bases de coordinación entre los distintos niveles de gobierno en materia de cultura y otros aspectos relacionados con los derechos culturales.
7. **Contestación de demanda.** El Congreso y el Poder Ejecutivo, ambos del Estado de Hidalgo, formularon sus respectivas contestaciones a la demanda en las que sostuvieron la constitucionalidad de la norma impugnada.
8. **Cierre de instrucción.** Una vez celebrada la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos, el ministro instructor declaró cerrada la instrucción para elaborar el proyecto de resolución correspondiente.
9. **Retorno.** Con motivo de la nueva integración de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la controversia constitucional se turnó a la ministra Sara Irene Herrerías Guerra para la formulación de la propuesta de resolución pertinente.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 200/2024

10. **Publicación del proyecto.** De conformidad con el artículo 18 del Reglamento de Sesiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de Integración de las Listas de Asuntos con Proyecto de Resolución, el proyecto de sentencia se hizo público, con la misma anticipación que la publicación de listas de los asuntos.

II. COMPETENCIA

11. La Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la controversia constitucional en términos de los artículos 105, fracción I, inciso a), de la Constitución Federal; 1º de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del mencionado precepto 105 constitucional; y 16, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y punto segundo, fracción I, del Acuerdo General 2/2025 (12a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de tres de septiembre de dos mil veinticinco, en el que se precisan los asuntos de su competencia y los que se delegan a otros órganos jurisdiccionales federales¹, ya que se plantea un conflicto entre el Poder Ejecutivo Federal y los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Hidalgo.

III. PRECISIÓN Y EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO

12. En términos del artículo 41, fracción I de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario fijar el acto impugnado en esta controversia y verificar las pruebas aportadas para definir si se tiene por demostrado.
13. En ese sentido, de la lectura de la demanda se advierte que el Poder Ejecutivo Federal impugna el inciso f) del artículo 30, fracción I, de la Ley de Cultura y Derechos Culturales del Estado de Hidalgo², adicionado mediante el Decreto 903 publicado el diecisiete de mayo de dos mil veinticuatro en el Periódico Oficial de la referida entidad, cuyo ejemplar fue exhibido por el Poder Ejecutivo demandado, lo que, además, acredita su existencia.

¹ **SEGUNDO. Competencia reservada del Pleno de la SCJN.** La SCJN conservará para su resolución:
I. Las controversias constitucionales previstas en el artículo 105, fracción I, de la CPEUM, así como los recursos interpuestos en éstas;
(...)
² **Artículo 30.** El patrimonio cultural del Estado, está constituido por bienes tangibles e intangibles portadores de valores testimoniales.
Forman parte del patrimonio cultural, susceptible de ser integrados:
I. Intangibles:
(...)
f) Charrería

IV. OPORTUNIDAD

14. El artículo 21, fracción II de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que en las controversias constitucionales que impugnen normas generales, el plazo para la presentación de la demanda es de treinta días hábiles contados a partir del día siguiente al de su publicación o al de su primer acto de aplicación.
15. En el caso, la norma impugnada se publicó el diecisiete de mayo de dos mil veinticuatro, por lo que el **plazo legal de treinta días hábiles transcurrió del veinte de mayo de dos mil veinticuatro al veintiocho de junio del mismo año**; descontándose los sábados y domingos, por ser considerados inhábiles en términos de los artículos 2º de la Ley Reglamentaria que rige las controversias constitucionales, así como 3 y 229 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y del punto primero, incisos a) y b) del Acuerdo General 18/2013 de este Tribunal Pleno.
16. Por ello, si la demanda se depositó el **veintiocho de junio de dos mil veinticuatro** en el buzón judicial de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se concluye que **su presentación es oportuna**.

V. LEGITIMACIÓN

17. De acuerdo con el artículo 105, fracción I, inciso a) de la Constitución Federal, en relación con los preceptos 10 y 11 de la Ley Reglamentaria de la materia, la parte actora, demandada y, en su caso, tercera interesada deben comparecer a través del funcionariado que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarles y, en todo caso, se presumirá que quien comparece a juicio tiene capacidad para hacerlo en representación de la parte correspondiente, salvo prueba en contrario.

Legitimación activa

18. En el caso, la controversia constitucional fue promovida por el **Poder Ejecutivo Federal** en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 200/2024

de Hidalgo por estimar que se invadió competencia federal con la expedición de la norma impugnada, por lo que se estima que la parte actora tiene legitimación para accionarla, ya que es criterio de este Alto Tribunal que el mencionado Poder Ejecutivo Federal puede acudir a este medio de control constitucional a defender los intereses de la Federación, tal como se observa en la tesis de rubro: **CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL ESTÁ LEGITIMADO PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE LA FEDERACIÓN.**³

19. En esa lógica, si la demanda fue suscrita por la persona titular de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal, personalidad que acredita con la copia certificada de su nombramiento de dos de septiembre de dos mil veintiuno, es claro que cuenta con legitimación procesal activa para promover la controversia, ya que, en términos de los artículos 11 de la ley reglamentaria de la materia y 43, fracción X, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, es facultad de la citada Consejería Jurídica representar al Poder Ejecutivo Federal ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Legitimación pasiva

20. El **Poder Legislativo del Estado de Hidalgo** compareció por conducto del diputado presidente de la directiva del Congreso de esa entidad federativa, quien acreditó su personalidad con copia certificada de la constancia de mayoría expedida por el Instituto Estatal Electoral y del Acta de integración de la Directiva, por el que se le otorga tal cargo.
21. Luego, si en términos de los artículos 53, 62 y 63, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Hidalgo corresponde al presidente de la directiva representar al citado Congreso local en los asuntos en que éste sea parte, entonces el mencionado diputado presidente cuenta con legitimación pasiva en este asunto.
22. Por su parte, el **Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo** compareció por medio de su coordinador general jurídico, quien acreditó tal personalidad con copia certificada de su nombramiento de trece de septiembre de dos mil veintidós; además, exhibió copia certificada del poder general para pleitos y

³ Tesis: 2a. XLVII/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, abril de 2003, página 862, novena época, registro digital: 184512.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 200/2024

cobranzas otorgado en su favor por el gobernador de la entidad federativa para representar al Poder Ejecutivo local.

23. De acuerdo con el artículo 25, fracciones XI, párrafo primero y XIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno del Estado de Hidalgo, corresponde al titular de la Coordinación General Jurídica la representación del Poder Ejecutivo del Estado en todos los juicios en los que participe, de manera que el coordinador general jurídico cuenta con legitimación pasiva en este expediente.

Terceros interesados

24. En representación de las Cámaras de Senadores y de Diputados comparecieron las presidentas de sus mesas directivas, quienes acreditaron tal carácter con las actas correspondientes, en términos de los artículos 23, numeral 1 inciso I), y 67, párrafo primero de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de manera que ambas Cámaras del Congreso de la Unión están legitimadas para participar en este procedimiento.

VI. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y DE SOBRESEIMIENTO

25. En su contestación de demanda, el Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo hace valer la causa de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de la controversia constitucional, porque a su juicio la parte actora carece de interés legítimo para promover el medio de control constitucional que nos ocupa, toda vez que no se acredita un principio de agravio en tanto que la norma impugnada no invade la competencia federal.
26. Se desestima la causa de improcedencia debido a que su análisis requiere pronunciarse sobre el fondo del asunto, puesto que involucra definir si la norma impugnada invade la competencia de la Federación en su perjuicio, cuestión que representa la materia de esta controversia constitucional. Es aplicable la jurisprudencia de rubro: **CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE.**⁴

⁴ Tesis: P./J. 92/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo X, septiembre de 1999, página 710, novena época, registro digital: 193266.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 200/2024

27. Finalmente, al no existir otro motivo de improcedencia planteado, ni advertirse alguno de oficio, procede realizar el estudio de fondo.

VII. ESTUDIO DE FONDO

28. En su único concepto de invalidez, la parte actora plantea que establecer la *charrería* como parte del patrimonio intangible del Estado de Hidalgo invade la facultad del Congreso de la Unión, porque tal actividad no es única de esa entidad federativa, sino que es de interés nacional y constituye una tradición ecuestre que se realiza en diversos Estados de la República mexicana, por lo que su regulación cultural es exclusiva de la Federación.
29. Expone que en términos de las fracciones XXV y XXIX-Ñ del artículo 73 constitucional, si bien compete a los tres órdenes de gobierno legislar y participar en la regulación de los derechos culturales, lo cierto es que es facultad exclusiva del Congreso de la Unión determinar lo concerniente a los institutos federales de Antropología e Historia y de Bellas Artes y Literatura, como son los vestigios o restos fósiles y monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, cuya conservación es de interés nacional.
30. Es **infundado el concepto de invalidez** y para corroborarlo, en primer lugar, conviene desarrollar el sistema de competencias que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
31. El fundamento constitucional para el reparto de competencias entre la Federación y las entidades federativas lo constituye el artículo 124 que dispone que *las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales se entienden reservadas a los Estados o a la Ciudad de México, en los ámbitos de sus respectivas competencias*. De esta manera, se advierte que los Estados conservan las facultades generales y la Federación sólo tiene las que la Constitución Federal le asigna expresamente.
32. Para comprender este esquema, es necesario recordar que nuestro diseño institucional está construido a partir del federalismo, lo que significa que la República se integra por entidades federativas, libres y soberanas, que decidieron unirse bajo una Federación que a su vez tiene autonomía y soberanía; esto es, acordaron centralizar parte de sus facultades, pero

mantener el resto. De ahí que nuestra Constitución Federal reconozca esta realidad en varias de sus disposiciones⁵.

33. Por ejemplo, las potestades para definir quién ejecuta, quién aplica y quién gestiona las leyes se desprende del catálogo de facultades del Congreso de la Unión establecido en el artículo 73 constitucional, el cual se encuentra íntimamente relacionado con el diverso 124.
34. Este Alto Tribunal ha reconocido⁶ que las denominadas facultades concurrentes se ejercen simultáneamente por la Federación y las entidades federativas, como consecuencia de la unidad de fines o concordancia de propósitos que supone el régimen federal. Estas facultades atribuyen competencia tanto a los órganos federales como estatales, pero concediendo a una de ellas, en este caso a la Federación, la atribución para fijar las bases o determinado criterio de división de esa facultad.
35. Nuestro lenguaje constitucional llama concurrencias legislativas a las que derivan de la atribución combinada, segmentaria y hasta compartida que efectúa el constituyente en favor de los distintos órdenes de gobierno con relación a una materia competencial específica, a través de la distribución que se establece en una ley expedida por el Congreso de la Unión, llamada *ley general*.
36. Las leyes generales distribuyen las competencias entre la Federación y los Estados, estableciendo las bases para el desarrollo de las leyes locales correlativas, *desconstitucionalizando* la atribución de competencias entre los dos órdenes de gobierno, dejando la función de reparto en el Congreso Federal; este es, en parte, el caso de la materia cultural.
37. **En materia de cultura**, el artículo 73, fracción XXV, de la Constitución Federal⁷ otorga al Congreso de la Unión la competencia específica para

⁵ Por ejemplo, los preceptos 3, 4, 5, 18, 21, 27, 40, 41, 42, 43, 46, 48, 71, 73 y 124, entre otros.

⁶ Véase la tesis: P./J. 142/2001 de rubro: **FACULTADES CONCURRENTES EN EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO. SUS CARACTERÍSTICAS GENERALES.**, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, enero de 2002, página 1042, novena época, registro digital: 187982.

⁷ **Artículo 73.** El Congreso tiene facultad:
(...)

XXV. De establecer el Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, en términos del artículo 3o. de esta Constitución; establecer, organizar y sostener en toda la República escuelas rurales, elementales, media superiores, superiores, secundarias y profesionales; de investigación científica, de bellas artes y de enseñanza técnica, escuelas prácticas de agricultura y de minería, de artes y oficios, museos, bibliotecas, observatorios y demás institutos concernientes a la cultura general de los habitantes de la nación y legislar en todo lo que se refiere a dichas instituciones; para legislar sobre vestigios o restos fósiles y sobre

legislar sobre ciertos bienes culturales materiales: *vestigios o restos fósiles y sobre monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, cuya conservación sea de interés nacional.*

38. Esta disposición reconoce que determinados elementos del patrimonio tangible -por su relevancia histórica, artística o científica- requieren una protección reforzada desde el ámbito federal, dado su valor simbólico y cultural para el país en su conjunto.
39. Por su parte, la fracción XXIX-Ñ del mismo precepto constitucional⁸ prevé una competencia distinta al facultar al Congreso Federal *para expedir leyes que establezcan las bases sobre las cuales la Federación, las entidades federativas, los municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, coordinarán sus acciones en materia de cultura.* Además, impone la obligación de incorporar mecanismos de participación de los sectores social y privado, con el objetivo de cumplir los fines establecidos en el párrafo décimo segundo del artículo 4º constitucional⁹, que reconoce el derecho de acceso a la cultura y al ejercicio de los derechos culturales.
40. Es importante resaltar que la propia fracción XXIX-Ñ excluye expresamente de su ámbito de aplicación lo dispuesto por la fracción XXV del artículo 73. Esta exclusión implica que ciertos temas culturales no están sujetos al sistema de coordinación entre órdenes de gobierno. Así, quedan fuera del esquema concurrente materias como el sistema de carrera magisterial, la creación y operación de escuelas, instituciones de investigación científica, de bellas artes

monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, cuya conservación sea de interés nacional; así como para dictar las leyes encaminadas a distribuir convenientemente entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios el ejercicio de la función educativa y las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público, buscando unificar y coordinar la educación en toda la República, y para asegurar el cumplimiento de los fines de la educación y su mejora continua en un marco de inclusión y diversidad. Los Títulos que se expidan por los establecimientos de que se trata surtirán sus efectos en toda la República. Para legislar en materia de derechos de autor y otras figuras de la propiedad intelectual relacionadas con la misma;

⁸ **Artículo 73.** El Congreso tiene facultad:
(...)

XXIX-Ñ. Para expedir leyes que establezcan las bases sobre las cuales la Federación, las entidades federativas, los Municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, coordinarán sus acciones en materia de cultura, salvo lo dispuesto en la fracción XXV de este artículo. Asimismo, establecerán los mecanismos de participación de los sectores social y privado, con objeto de cumplir los fines previstos en el párrafo décimo segundo del artículo 4o. de esta Constitución.

⁹ **Artículo 4.** (...)

Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 200/2024

y enseñanza técnica, museos, bibliotecas, observatorios y otras entidades vinculadas a la cultura general de la población. Del mismo modo, se excluye la facultad legislativa relativa a vestigios, restos fósiles y monumentos arqueológicos, artísticos e históricos¹⁰.

41. En consecuencia, la fracción XXV consagra una facultad exclusiva del Congreso de la Unión, al margen del esquema de competencias compartidas previsto en la fracción XXIX-Ñ, puesto que no establece un marco de coordinación ni de distribución competencial entre órdenes de gobierno, sino una atribución directa y exclusiva para legislar sobre determinados bienes culturales materiales cuya conservación ha sido calificada como de interés nacional. A diferencia del sistema previsto en la fracción XXIX-Ñ, no contempla mecanismos de colaboración entre niveles de gobierno ni participación social o privada. Por tanto, no puede ser interpretada como parte del sistema cultural concurrente.
42. El alcance de la fracción XXV es, así, más acotado que el de la fracción XXIX-Ñ, ya que no se trata de una cláusula general en materia de cultura, sino de una habilitación legislativa concreta sobre bienes culturales tangibles que poseen un valor nacional. Todo lo que quede fuera de ese supuesto -incluyendo, por ejemplo, las políticas sobre patrimonio cultural inmaterial, fomento a la creación artística o promoción de expresiones culturales locales- debe regirse por el sistema de coordinación y concurrencia previsto en la fracción XXIX-Ñ y desarrollado a través de una ley general.
43. Precisamente, **es la fracción XXIX-Ñ del artículo 73 constitucional la que da origen al sistema concurrente en materia de cultura**. La redacción de este precepto es clara al otorgar competencia al Congreso de la Unión para emitir las leyes que establezcan las bases para coordinar las acciones en materia de cultura entre la Federación, las entidades federativas,

¹⁰ Véase la ejecutoria pronunciada en la controversia constitucional 13/2021, en la que se analizaron disposiciones de la Ley del Patrimonio Cultural del Estado de Nuevo León que regulaban los denominados *grabados inusuales en piedra caliza* y se estableció que la entidad federativa no tenía competencia para regular tales elementos al constituir vestigios o restos fósiles, de competencia exclusiva federal. Sobre las competencias fijadas por la fracción XXV del artículo 73 constitucional, se precisó que no existen condiciones previas necesarias para legislar sobre vestigios o restos fósiles; en cuanto a los monumentos arqueológicos, éstos son automáticamente de interés nacional y sólo para legislar sobre monumentos artísticos e históricos se necesita previamente una declaratoria de interés nacional. Además, se estimó que todo lo que no constituya vestigios fósiles o monumentos federales puede ser considerado patrimonio cultural local y la participación de las entidades federativas para la conservación de los monumentos a que se refiere la fracción XXV solo puede darse si la ley federal lo permite.

los municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el marco de sus respectivas competencias.

44. De hecho, la Ley General de Cultura y Derechos Culturales tiene como fundamento dicho precepto constitucional. En su artículo 1º¹¹ señala que *la presente ley regula el derecho a la cultura que tiene toda persona en los términos de los artículos 4º y 73, fracción XXIX-Ñ de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Promueve y protege el ejercicio de los derechos culturales y establece las bases de coordinación para el acceso de los bienes y servicios que presta el Estado en materia cultural. Sus disposiciones son de orden público e interés social y de observancia general en el territorio nacional.*
45. En su artículo 2¹² señala que ésta tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México en materia de política cultural y los mecanismos de acceso y participación de las personas y comunidades a las manifestaciones culturales; reconocer los derechos culturales de las personas; y promover y respetar la continuidad y el conocimiento de la cultura del país en todas sus manifestaciones y expresiones, entre otras cosas.
46. También es relevante el artículo 3¹³ que dispone que las manifestaciones culturales a que se refiere la ley son los elementos materiales e inmateriales pretéritos y actuales, inherentes a la historia, arte, tradiciones, prácticas y conocimientos que identifican a grupos, pueblos y comunidades que integran

¹¹ **Artículo 1.-** La presente Ley regula el derecho a la cultura que tiene toda persona en los términos de los artículos 4o. y 73, fracción XXIX-Ñ de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Promueve y protege el ejercicio de los derechos culturales y establece las bases de coordinación para el acceso de los bienes y servicios que presta el Estado en materia cultural. Sus disposiciones son de orden público e interés social y de observancia general en el territorio nacional.

¹² **Artículo 2.-** La Ley tiene por objeto:

I. Reconocer los derechos culturales de las personas que habitan el territorio de los Estados Unidos Mexicanos;

(...)

III. Promover y respetar la continuidad y el conocimiento de la cultura del país en todas sus manifestaciones y expresiones;

(...)

VI. Establecer las bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y alcaldías de la Ciudad de México en materia de política cultural;

VII. Establecer mecanismos de participación de los sectores social y privado, y

¹³ **Artículo 3.-** Las manifestaciones culturales a que se refiere esta Ley son los elementos materiales e inmateriales pretéritos y actuales, inherentes a la historia, arte, tradiciones, prácticas y conocimientos que identifican a grupos, pueblos y comunidades que integran la nación, elementos que las personas, de manera individual o colectiva, reconocen como propios por el valor y significado que les aporta en términos de su identidad, formación, integridad y dignidad cultural, y a las que tienen el pleno derecho de acceder, participar, practicar y disfrutar de manera activa y creativa.

la nación, elementos que las personas, de manera individual o colectiva, reconocen como propios por el valor y significado que les aporta en términos de su identidad, formación, integridad y dignidad cultural, y a las que tienen el pleno derecho de acceder, participar, practicar y disfrutar de manera activa y creativa.

47. El artículo 15¹⁴ dispone que la Federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, en el ámbito de su competencia, desarrollarán acciones para investigar, conservar, proteger, fomentar, formar, enriquecer y difundir el patrimonio cultural inmaterial.
48. Por otro lado, el artículo 16¹⁵ prevé que las entidades federativas, en el ámbito de su competencia, podrán regular el resguardo del patrimonio cultural inmaterial e incentivar la participación de las organizaciones de la sociedad civil y pueblos originarios, y que los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México promoverán, en el ámbito de sus atribuciones, acciones para salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial.
49. Las disposiciones descritas, lejos de evidenciar un sistema de exclusión, confirman que entre las entidades federativas y la Federación existe un régimen de coordinación, con competencias propias de cada nivel de gobierno, cuya finalidad es establecer las bases de esa coordinación y no monopolizar las competencias.
50. De una interpretación sistemática y teleológica se puede desprender que cuando el artículo 16 de la ley en comento otorga a las entidades federativas competencia para regular el resguardo del patrimonio cultural inmaterial, el verbo *resguardar* implica amplias facultades de los Estados para implementar las acciones que consideren necesarias para defender, proteger, escudar o preservar su patrimonio cultural¹⁶.

¹⁴ **Artículo 15.-** La Federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, en el ámbito de su competencia, desarrollarán acciones para investigar, conservar, proteger, fomentar, formar, enriquecer y difundir el patrimonio cultural inmaterial, favoreciendo la dignificación y respeto de las manifestaciones de las culturas originarias, mediante su investigación, difusión, estudio y conocimiento.

¹⁵ **Artículo 16.-** Las entidades federativas, en el ámbito de su competencia, podrán regular el resguardo del patrimonio cultural inmaterial e incentivar la participación de las organizaciones de la sociedad civil y pueblos originarios.

Los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México promoverán, en el ámbito de sus atribuciones, acciones para salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial.

¹⁶ De acuerdo con la definición del Diccionario de la Real Academia Española: 1. Tr. Defender (II amparar). Sin: defender, proteger, escudar, amparar, preservar, guarecer, refugiar, esconder, abrigar, parapetar.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 200/2024

51. Además, nuestro sistema federal es claro en su formulación en cuanto a que todo aquello que no esté expresamente otorgado a la Federación corresponde al ámbito de competencia de las entidades federativas; por lo que si tomamos en cuenta las acciones que establece el artículo 15, ello nos lleva a estimar que serían nugatorias las facultades de investigar, conservar, proteger, fomentar, formar, enriquecer y difundir el patrimonio cultural inmaterial en el ámbito de su jurisdicción si los Estados carecen de la posibilidad de determinar, a nivel local, qué prácticas o expresiones conforman su patrimonio cultural inmaterial.
52. Por ello, puede concluirse que la regulación del *resguardo* que autoriza la ley general de cultura incluye medidas de protección como las declaratorias de patrimonio cultural inmaterial que hagan las entidades federativas en el ámbito de su competencia. Y es que, si bien la ley general no establece expresamente la facultad de emitir estas declaratorias, tanto las finalidades establecidas por este ordenamiento como el sistema federalista de distribución de competencias previsto en la Constitución Federal, llevan a considerar que las entidades federativas las pueden emitir, puesto que es una condición necesaria para habilitar su competencia en cuanto al resguardo de su propio patrimonio cultural inmaterial.
53. Respecto a este último punto, las entidades federativas se encuentran en una mejor posición que la Federación para determinar qué prácticas, tradiciones, expresiones o actividades propias de su territorio forman parte de su patrimonio cultural inmaterial. La cultura es un ámbito diverso en el que existen múltiples formas en que se expresan las personas, grupos y comunidades. Estas expresiones se transmiten de forma distinta y no siempre de manera uniforme o con la misma intensidad por un territorio determinado.
54. En ese sentido, las autoridades federales no pueden, en muchos casos, estar en aptitud para determinar qué forma parte del patrimonio cultural de una determinada región o territorio, sino que son las entidades federativas quienes tienen la facultad de determinar, por su cercanía con el territorio y la sociedad que practica alguna manifestación cultural, si ésta cumple con los elementos materiales e inmateriales, pretéritos y actuales inherentes a la historia, arte, tradiciones, prácticas y conocimientos que identifican a grupos, pueblos y comunidades que integran la nación, elementos que las personas reconocen

como propios por el valor y significado que les aporta en términos de su identidad y dignidad cultural.

55. Como se expuso, el federalismo implica que las partes integrantes de la Federación, libres y soberanas, se unen con el objetivo de fortalecer y coordinar sus esfuerzos, de forma que mantienen ciertas facultades, pero enajenan otras en favor de un régimen centralizado. Sin embargo, hay que recordar que esta cesión es la excepción y no la regla, por lo que existe un campo de atribuciones que les pertenece originariamente a las entidades federativas y que hay que respetar y, sin duda, la determinación de su identidad cultural es uno de estos cotos de poder que se encuentra a salvo de la intervención de cualquier otro orden de gobierno.
56. Una vez que se ha definido que las entidades federativas sí pueden emitir estas declaratorias conforme al parámetro constitucional, se observa que, en el caso, el Poder Ejecutivo Federal argumenta que la *charrería* es competencia de la Federación porque ya está declarada como patrimonio cultural inmaterial de la nación y, además, porque la UNESCO reconoció esta práctica como patrimonio cultural de la humanidad. Estima que estas circunstancias revelan que legislar sobre *charrería* no corresponde a las legislaturas locales, específicamente para el Congreso del Estado de Hidalgo.
57. Adicionalmente, refiere que en el amparo en revisión 80/2022 la extinta Segunda Sala de este Alto Tribunal estableció que el Estado de Nayarit carecía de competencia para emitir una declaratoria de patrimonio cultural respecto de ciertas actividades, puesto que, a su juicio, esta competencia corresponde a la Federación.
58. Si bien la decisión de la otrora Segunda Sala versó sobre la falta de competencia del poder legislativo de una entidad para emitir un decreto en el que se declara determinadas actividades como patrimonio cultural inmaterial de la entidad, lo cierto es que el criterio sustentado en ese precedente, además de no ser obligatorio para este Tribunal Pleno, no es aplicable al caso que nos ocupa en tanto que las consideraciones centrales corresponden a aspectos que aquí no se actualizan.
59. En ese precedente, la extinta Segunda Sala sostuvo las consideraciones siguientes:

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 200/2024

- 59.1. En primer lugar, el análisis se circunscribió a la fiesta taurina y a las peleas de gallos. La sentencia se pronunció exclusivamente en el sentido de que el Congreso de Nayarit carece de atribuciones para emitir la declaratoria de patrimonio inmaterial del Estado por cuanto hace a la fiesta taurina y a las peleas de gallos, ya que consideró que se actualizaba un interés nacional respecto a estas actividades en concreto, por lo que era la Federación la que contaba con la facultad para emitir la declaratoria correspondiente.
- 59.2. La resolución señaló que la regla general es que compete a los tres órdenes de gobierno legislar y participar en la regulación de los derechos culturales, mientras que la excepción es la reserva al Congreso de la Unión en términos del artículo 73, fracciones XXV y XXIX-Ñ constitucional; fuera de ello, las entidades federativas cuentan con facultades normativas para crear, fomentar y difundir la cultura.
- 59.3. La facultad de las entidades federativas de emitir declaratorias de patrimonio cultural inmaterial se ha empleado varias veces y se advierte que ese patrimonio se relaciona preponderantemente con elementos identitarios de la localidad, comunidad o región respectiva; pese a que existen diversos patrimonios culturales inmateriales alrededor de la República que se relacionan con una misma actividad, lo cierto es que son las cualidades únicas o especiales que guardan tales expresiones culturales en una determinada localidad, comunidad o Estado lo que permite que se les reconozcan como verdadero patrimonio local, al formar parte de la identidad cultural de la zona geográfica, por constituir una expresión de *lo local* y que identifica la riqueza cultural de una determinada comunidad o región.
- 59.4. Por lo que hace a la Federación, a nivel nacional se encuentran reconocidos, al menos, tres patrimonios culturales inmateriales: la cocina popular en la cultura mexicana; la *charrería*, tradición ecuestre en México; y la medicina tradicional mexicana. La justificación de la declaratoria nacional se relaciona, entre otras cuestiones, con el hecho de que las expresiones culturales se constituyen como factor de cohesión social, donde se sienten representados todos los mexicanos, por transmitir valores y conocimientos a través del tiempo, que son compartidos por toda

la sociedad mexicana. De tal suerte que constituyen elementos suprarregionales para identificar *lo mexicano*; o la identidad de la *mexicanidad*.

- 59.5. En cuanto a las peleas de gallos y la fiesta taurina se consideró que son actividades culturales que actualizan un interés nacional que amerita la intervención de la Federación, por dos razones fundamentales: 1) porque trascienden a una sola entidad federativa, lo cual implica que, en realidad, no constituyen rasgos identitarios o exclusivos de una determinada localidad, región o comunidad, sino que son una práctica que es compartida por varios Estados de la República; y 2) la valoración calificativa del patrimonio cultural inmaterial de esas actividades culturales se encuentra aparejada a la adecuada interpretación de normas constitucionales y convencionales, así como a una plausible tensión o contradicción entre valores fundamentales; lo cual merece ser examinado a nivel federal.
- 59.6. Se señaló que, ante la ausencia de un elemento meramente local respecto a la fiesta taurina y las peleas de gallos, así como a la disparidad y clara contradicción en el reconocimiento y ejercicio de esas actividades, en tanto expresiones culturales, se actualiza un interés nacional para dar orden y sentido a las políticas públicas culturales en esta cuestión; de ahí que corresponda a la Federación determinar si son susceptibles de ser reconocidas como patrimonio cultural inmaterial y, consecuentemente, establecer una política armónica y coherente a nivel nacional.
- 59.7. Se estimó que en ese caso la valoración o calificativa respectiva por la Federación se encuentra aparejada a la adecuada interpretación de normas constitucionales y convencionales, así como a una tensión o contradicción entre valores fundamentales, a saber, la protección cultural reforzada de las peleas de gallos y fiesta taurina, y la protección y bienestar animal.
- 59.8. Así, estimó que corresponde a la Federación determinar, bajo la óptica constitucional y convencional, si las peleas de gallos y la fiesta taurina son o no susceptibles de alcanzar un estatus de tutela reforzada o diferenciada en materia de derechos culturales, mediante su reconocimiento como patrimonio cultural inmaterial. Ello en el entendido de que, justamente, el

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 200/2024

bienestar y protección animal pueden concebirse como verdaderos bienes constitucionales y convencionales respecto de los que el Estado mexicano se ha comprometido a proteger y garantizar, además de lograr la armonización de la política pública en materia cultural a fin de lograr la cohesión social.

- 59.9. En conclusión, la pregunta que fue planteada es si tales actividades podían ser susceptibles de una declaratoria local de patrimonio cultural inmaterial. En ese sentido, la única conclusión válida que puede desprenderse de este precedente es simple y concretamente que las entidades federativas carecen de competencia para reconocer, por su alcance nacional, a las peleas de gallos o la fiesta taurina como patrimonio cultural inmaterial, en tanto esa debe ser una determinación federal.
60. En resumen, la extinta Segunda Sala consideró que la fiesta taurina y las peleas de gallos se enmarcaban en la excepción prevista en el artículo 73, fracción XXV constitucional sobre vestigios o restos fósiles y monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, cuya conservación es de interés nacional, de ahí que no podían ser susceptibles de una declaratoria local de patrimonio cultural inmaterial, toda vez que se actualizaba un interés nacional sobre tales actividades debido a que, por un lado, éstas se realizaban en más de una entidad federativa, de manera que no constituyen rasgos identitarios de una sola localidad y, por otro, la valoración calificativa de esas actividades culturales en concreto se encontraba aparejada a la interpretación de normas constitucionales y convencionales, puesto que existía una posible tensión o contradicción entre valores fundamentales; lo cual merecía ser examinado a nivel federal.
61. Este análisis no equivale a un pronunciamiento en abstracto sobre la facultad de las entidades federativas para emitir declaratorias, por el contrario, este caso se analizó en un medio de control de constitucionalidad concreto que es el juicio de amparo, el cual se concentró en las características fácticas particulares del asunto.
62. Pero más allá de ello, este Tribunal Pleno difiere de la conclusión alcanzada en el precedente en comento, porque, como se advierte del parámetro de interpretación constitucional, existe una distinción clara entre patrimonio

cultural tangible y patrimonio cultural inmaterial que el precedente no consideró.

63. Mientras que el artículo 73, fracción XXV constitucional establece una competencia federal exclusiva sobre vestigios o restos fósiles y monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, cuya conservación sea de interés nacional, es decir, sobre bienes culturales materiales específicos; el patrimonio cultural inmaterial se rige por el sistema concurrente previsto en la fracción XXIX-Ñ del mismo artículo.
64. El precedente citado interpretó indistintamente estos regímenes competenciales al aplicar los criterios de la fracción XXV -diseñados para bienes tangibles de interés nacional- al ámbito del patrimonio inmaterial, que por su propia naturaleza está sujeto a un esquema de coordinación entre los distintos órdenes de gobierno. Esta mezcla conceptual llevó a la entonces Segunda Sala a centralizar competencia que, bajo el sistema concurrente cultural, debe ejercerse de manera coordinada pero no exclusiva.
65. En ese sentido, el precedente partió de una concepción inexacta al equiparar el alcance geográfico de una práctica cultural con la pérdida automática de competencia local para su regulación. Esta aproximación desconoce la naturaleza misma del federalismo cultural, en el que las manifestaciones pueden tener simultáneamente dimensiones nacionales y locales sin que ello implique exclusión competencial.
66. Además, la argumentación de que el interés nacional se actualiza simplemente porque una práctica trasciende a una sola entidad federativa resulta inconsistente con el sistema concurrente establecido en la fracción XXIX-Ñ del artículo 73 constitucional. Esta lógica llevaría al extremo de que cualquier manifestación cultural compartida por múltiples entidades perdería automáticamente su carácter local, dejando sin efecto las competencias estatales en materia cultural que fueron delineadas previamente.
67. Asimismo, se estima que las competencias federal y local no son excluyentes sino complementarias. El hecho de que la Federación haya declarado una actividad como patrimonio cultural inmaterial de la nación no impide que las entidades federativas reconozcan las particularidades y expresiones locales de esta práctica en sus respectivos territorios. El sistema concurrente previsto

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 200/2024

constitucionalmente permite y fomenta esta coexistencia de niveles competenciales.

68. Finalmente, es importante indicar que las entidades federativas también tienen obligaciones constitucionales en materia de protección y bienestar animal, en el marco de sus competencias, que deben ser armonizadas con sus facultades culturales. La supuesta tensión entre derechos culturales y protección animal no justifica la centralización de competencias, sino que debe resolverse mediante el ejercicio responsable de las facultades concurrentes, permitiendo que cada orden de gobierno contribuya desde su ámbito a la construcción de políticas públicas coherentes y respetuosas tanto de los derechos culturales como del bienestar animal y otros intereses relevantes.
69. Por tanto, los congresos locales sí pueden regular qué prácticas constituyen su patrimonio cultural inmaterial, puesto que, además de que tienen, en general, competencia para determinar esta cuestión en el ámbito local, no están impedidas para proteger una actividad nacional a nivel local, si ésta también forma parte de sus manifestaciones culturales regionales.
70. Así, este Tribunal Pleno considera que **las entidades federativas sí tienen competencia para regular lo concerniente a aquellas actividades que forman parte de su patrimonio inmaterial**, toda vez que del sistema de competencias establecido en la Constitución Federal y en la Ley General de Cultura y Derechos Culturales no se advierte alguna prohibición para los Estados en ese sentido, ni se otorga facultad expresa para que la Federación excluya, con preferencia, a las entidades federativas de regular lo que constituye su patrimonio cultural inmaterial; además de que es acorde con nuestro sistema federalista que dichas entidades sean quienes determinen cuáles son las tradiciones, prácticas o costumbres que son significativas para sus propios habitantes y que forman parte de su identidad.
71. Como se precisó, nuestro diseño constitucional tiene como base la república federalista, por lo que los artículos 73 y 124 constitucionales reconocen que la regla es la competencia de los Estados y la excepción la de la Federación. De esta forma, toda facultad para legislar que no se encuentra expresamente otorgada al Congreso de la Unión se entiende reservada a los congresos de las entidades federativas, sin que ello implique que la Constitución Federal trace

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 200/2024

una línea indeleble entre las facultades federales y las locales, al contrario, reconoce e incentiva la colaboración entre los distintos órdenes de gobierno.

72. Un claro ejemplo de esta inclinación hacia la cooperación es el sistema de facultades concurrentes, donde la Federación está facultada para emitir una ley general que sienta las bases de la regulación en la materia y las entidades federativas, partiendo de ese piso mínimo y haciendo uso de su libertad de configuración legislativa, emitan su propia regulación adaptada a su realidad, pero sin contravenir las bases mínimas previstas en la legislación general.
73. Lo que revela esta forma de interacción normativa es la aceptación de que existen cuestiones que deben ser reguladas de manera uniforme, pero también existen supuestos que es mejor determinar desde una perspectiva local, puesto que las instituciones, el diseño normativo y las condiciones sociales pueden variar enormemente en cada entidad federativa.
74. En ese sentido, si una ley general no restringe un ámbito determinado o no otorga expresamente a las autoridades federales una competencia, entonces debe entenderse que las legislaturas locales tienen libertad para regularlo dentro de los límites delineados por la ley general.
75. En el caso, esta Suprema Corte no encuentra alguna atribución expresa en favor de la Federación para regular las declaratorias de patrimonio cultural intangible, ni una prohibición para que las entidades federativas regulen este aspecto en su legislación, por lo que, en vista del funcionamiento del sistema concurrente explicado, debe entenderse que los poderes legislativos de las entidades federativas tienen facultades para regular estas cuestiones.
76. Además, la posibilidad de declarar una actividad como patrimonio cultural inmaterial a nivel local hace perfecta lógica con nuestro sistema federalista, que busca que las decisiones más relevantes a nivel local sean tomadas por las autoridades más cercanas a su contexto particular. Sin lugar a duda, en materia de cultura esta función es evidentemente relevante, puesto que quién mejor que las legislaturas locales para determinar qué actividades constituyen una auténtica práctica cultural en la entidad o qué elementos efectivamente forman parte de su identidad. Esto es de gran importancia y no debe perderse de vista, ya que la conformación del patrimonio cultural intangible de cada

entidad tiene una relación directa en su reconocimiento como territorio autónomo, libre y digno de determinar su propia identidad.

77. En ese sentido, a diferencia de lo que sustentó la extinta Segunda Sala, la Federación no tiene exclusividad a su favor sobre las expresiones culturales reconocidas como patrimonio cultural inmaterial nacional; y es que, por una cuestión de simple definición, el patrimonio cultural nacional puede insertarse en las partes que conforman la nación, porque es esta práctica reiterada y medianamente uniforme en todo el territorio, lo que le concede su carácter de nacional.
78. Por tal razón, es importante destacar que, incluso si una actividad está reconocida como patrimonio cultural inmaterial a nivel nacional, ello no excluye en automático la posibilidad de que los Estados también puedan reconocerla como tal en sus legislaciones, especialmente si las regulaciones tienen una finalidad meramente de reconocimiento o declarativa.
79. Esta postura se refuerza si se toma en cuenta que las costumbres, actividades o tradiciones que forman parte de la cultura intangible son prácticas difusas, que muchas veces permean en distintos sectores de la sociedad y que se extienden en un espacio geográfico difícil de delimitar. Ciertamente, la cultura adquiere formas diversas a través del tiempo y del espacio y se manifiesta en la pluralidad de las identidades que caracterizan a los grupos y las sociedades que componen la humanidad¹⁷.
80. De tal manera, si un congreso estatal, en representación de quienes habitan un Estado, decide reconocer una actividad como patrimonio inmaterial de la entidad, en principio, se debe ser respetuoso de su libertad configurativa para hacerlo.
81. Debe decirse que esta interpretación del sistema de concurrencia en materia de cultura es la que resulta congruente con nuestro sistema federal, el cual busca que los órdenes de gobierno federal y regional actúen de forma independiente pero coordinada. Además, si acepta que la naturaleza de una sociedad se refleja en las formas externas de sus arreglos políticos y constitucionales, es cierto que la práctica dictada por nuestra propia

¹⁷ Véase el artículo 1º de la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 200/2024

Constitución Federal revela que las instituciones políticas y jurídicas en México tienden a resguardar el federalismo de forma particular.

82. No obstante, esta Suprema Corte reconoce que esta libertad no es absoluta, sino que está sujeta a un margen de razonabilidad que deberá analizarse en cada caso concreto. No le corresponde a este Alto Tribunal analizar si una actividad en sí misma tiene valores para considerarse tradición o cultura, sino únicamente puede examinar si esa actividad tiene elementos materiales o inmateriales pretéritos y actuales con el propósito de evitar que la legislación local pueda consolidar prácticas no deseadas como la apropiación cultural.
83. Esta apreciación deberá realizarse caso por caso, dado que las expresiones culturales pueden ser diversas y variadas. En ese sentido, el método utilizado en futuras controversias puede ser diferente dependiendo del asunto, por lo que esta decisión no pretende constituir un criterio que abarque la mayoría de los casos a forma de regla, por el contrario, eso será tarea de quien juzgue casuísticamente.
84. En este caso, es suficiente con constatar que la *charrería*, deporte ecuestre, fue declarado patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO, lo que permite concluir que la *charrería* es una actividad reconocida en México, que forma parte de sus tradiciones y es propio y exclusivo de este país.
85. Partiendo del supuesto de que la *charrería* es una actividad cultural que se atribuye a la nación mexicana sin distinción de entidades o regiones, entonces en principio no es posible excluir a las entidades de incluir esta práctica como parte de su patrimonio cultural intangible.
86. Sin embargo, hay que apuntar que, aunque se trate de una práctica nacional y en principio se reconozca como patrimonio de toda la nación, incluyendo cada una de las partes integrantes de su territorio, esta es una presunción que admite prueba en contrario, pero ante la presunción de validez de los actos de las legislaturas locales, es responsabilidad de la autoridad que reclama la invasión de competencias probar que la actividad no forma parte de la práctica cultural local.
87. En este caso, la parte actora y los terceros interesados no aportaron pruebas tendientes a demostrar que la *charrería* no es un deporte que se lleve a cabo

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 200/2024

en el Estado de Hidalgo de tal forma que impida considerarse como una actividad que forma parte de su patrimonio cultural inmaterial.

88. Además, en sus contestaciones, las autoridades demandadas, en particular el poder ejecutivo local, expresaron que la *charrería* constituye una tradición arraigada en el Estado de Hidalgo, entidad que incluso ha sido reconocida como *la cuna de la charrería*, así como que, como escuela hípica, se originó en los Llanos de Apan en Hidalgo y que, como deporte, surgió tras la reforma agraria de principios del siglo XX, cuando los antiguos terratenientes emigraron a las ciudades.
89. De la igual forma, en la exposición de motivos de la iniciativa que dio origen al Decreto 903 impugnado, se señaló lo siguiente:
 - 89.1. La *charrería* es más que un deporte tradicional mexicano. Representa una forma de vida arraigada en la historia y la identidad de México. A través de la *charrería* se preservan las tradiciones y valores culturales de la cultura ranchera, como el valor, la destreza, la camaradería y el respeto por los animales.
 - 89.2. Además de ser un deporte competitivo, la *charrería* es una manifestación artística que celebra la habilidad ecuestre y la destreza en la monta de caballos. Mas allá de la arena de rodeo, la *charrería* es un símbolo de la riqueza cultural y patrimonial de México, que sigue siendo apreciada y practicada por generaciones de mexicanos en todo el país.
 - 89.3. Originaria de las zonas rurales, la *charrería* se ha convertido en un símbolo de la identidad nacional, representando los valores de honor, disciplina y trabajo en equipo.
 - 89.4. A través de sus competencias y eventos, la *charrería* no solo preserva las habilidades de la equitación y el manejo de ganado, sino que también celebra la historia y el orgullo de México. Es una expresión de la rica herencia cultural del país, transmitida de generación en generación como un legadopreciado que sigue vigente en la actualidad.
90. De la exposición de motivos se advierte que la *charrería* en el Estado de Hidalgo se considera una práctica cultural con rasgos identitarios que incluso

sobrepasan su carácter deportivo; que a través de ella se preservan tradiciones y valores de la cultura ranchera; que es una manifestación artística y símbolo de la riqueza cultural y patrimonial de México. De forma relevante, establece que es una tradición que ha sido aprendida y transmitida por generaciones en todo el país y que sigue vigente hoy en día.

91. Además, el arraigo de esta tradición en la entidad se confirma con el documento de consentimiento de las comunidades que recopiló la UNESCO para emitir la declaración de reconocimiento de la *charrería* como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, que, en síntesis, expone lo siguiente:

Nosotros los charros y las charras que formamos parte de la nación mexicana, siendo receptores y portadores de una gran herencia que se nos ha transmitido durante siglos por nuestros antepasados y nos ha dado una identidad común y colectiva, reconocemos nuestra tradición, la charrería, como representante del patrimonio cultural de México.

Por lo tanto, a los 23 días del mes de marzo del año 2011, manifestamos nuestro consentimiento libre, previo e informado para la presentación de la candidatura de La Charrería Tradición Ecuestre Mexicana para su postulación a la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad declarado por la UNESCO.

Asimismo, damos fe que participamos en el proceso de la elaboración del expediente a través del consentimiento general de los que participan en esta tradición ancestral.

Somos conscientes de la responsabilidad que adquirimos en la presentación de la candidatura de nuestra manifestación cultural y de la importancia que el Plan de Salvaguardia tiene para la conservación, revalorización, transmisión, promoción, difusión y revitalización. Por lo tanto, asumimos el compromiso de implementarla y darle seguimiento permanente.

92. Este documento fue suscrito por el presidente del Consejo Directivo de la Asociación Nacional de Charros, por el presidente de la Comisión Histórica de dicha asociación y por los presidentes de las asociaciones de charros de los Estados de Hidalgo, Jalisco, Oaxaca, Estado de México, Querétaro, Michoacán, Puebla, Ciudad de México y Zacatecas. Asimismo, el documento fue firmado por diversos artesanos relacionados con la práctica de la *charrería*, entre ellos, un artesano de cabezadas de piel del Estado de Hidalgo¹⁸.
93. Estos elementos demuestran razonablemente que en el Estado de Hidalgo existe una tradición respecto a la *charrería*, por lo que es legítimo que, en

¹⁸ Documento consultable en: <https://ich.unesco.org/es/RL/la-charrería-tradición-ecuestre-en-méxico-01108>.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 200/2024

términos de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, tomen todas las medidas para resguardarla, como puede ser su reconocimiento como patrimonio cultural inmaterial del Estado a través de la ley de cultura local.

94. Consecuentemente, resulta **infundado** el argumento de la parte actora, por lo que se reconoce la validez del inciso f) del artículo 30, fracción I de la Ley de Cultura y Derechos Culturales del Estados de Hidalgo.

VIII. DECISIÓN

95. Por lo expuesto y fundado, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación:

RESUELVE

PRIMERO. Es **procedente** pero **infundada** la controversia constitucional.

SEGUNDO. Se **reconoce la validez** del inciso f) del artículo 30, fracción I de la Ley de Cultura y Derechos Culturales del Estado de Hidalgo, adicionado mediante decreto 903 publicado el diecisiete de mayo de dos mil veinticuatro en el Periódico Oficial de esa entidad federativa.

TERCERO. Publíquese esta resolución en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución por medio de oficio a las partes; devuélvase el expediente a la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad para los efectos legales a que haya lugar y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por unanimidad de ocho votos de las personas Ministras Herrerías Guerra; Espinosa Betanzo separándose de los párrafos 77, 81 y del 85 al 92; Esquivel Mossa; Batres Guadarrama con consideraciones adicionales; Ortiz Ahlf; Figueroa Mejía; Guerrero García y Presidente Aguilar Ortiz. Las personas Ministras Espinosa Betanzo y Batres Guadarrama anunciaron sendos votos concurrentes.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 200/2024

La señora Ministra Ríos González no asistió a la sesión de veintiséis de febrero de dos mil veintiséis previo aviso a la Presidencia.

El señor Ministro Presidente Aguilar Ortiz declaró que el asunto se resolvió en los términos propuestos.

Firman el señor Ministro Presidente y la señora Ministra Ponente con el Secretario General de Acuerdos, que autoriza y da fe.

PRESIDENTE

*(Esta sentencia se suscribe
con Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación [FIREL]).*

MINISTRO HUGO AGUILAR ORTIZ

PONENTE

*(Esta sentencia se suscribe
con Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación [FIREL]).*

MINISTRA SARA IRENE HERRERÍAS GUERRA

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

*(Esta sentencia se suscribe
con Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación [FIREL]).*

DANIEL ÁLVAREZ TOLEDO

pZ38Zs6yenmldTpRwAqGq+HPVWHVc/AA2aVaEmYnrY=

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 200/2024

Esta hoja corresponde a la sentencia emitida en la controversia constitucional 200/2024, fallada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión de veintiséis de febrero de dos mil veintiséis. **CONSTE.**

pZ38Zs6yenmldTpRwAqGq+HPVWHVc/AA2aVaEmYnrY=